Sr. Presidente del
Consejo Deliberante
de la ciudad de Ushuaia

CONCEJO DELIBERANTE MESA DE ENTRADA LEGISLATIVA ASUNTOS INGRESADOS	
Fecha:	11/10/13 Hs. 10:45
Numero:	1294 Folios: 4
Expte. N°	1048/2009 -
Clase:	
Recibido:	<i>[Firma]</i>

De nuestra mayor consideración:

Los abajo firmantes beneficiarios del programa "Módulos de Asentamiento Habitacional" creado por Ordenanza N° 3376, tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a los efectos de presentar una modificación al proyecto de Ordenanza que presentara *La Consejal Gagliardi* solicitando se tome la iniciativa presentada con la modificación que por la presente se propone.

Previo a presentar el proyecto de ordenanza con las modificaciones que postulamos, consideramos conveniente realizar algunas consideraciones que fundamentan ampliamente la petición que formulamos en torno a la regularidad dominial de la solución habitacional que se nos otorgara.

Como ya lo hemos venido manifestando en otras oportunidades, la problemática que nuclea a los vecinos de los módulos de asentamiento habitacional de Andorra, lo constituye, el reconocimiento del derecho humano y social del "acceso a una vivienda digna" y a uno de los aspectos centrales de su conceptualización esto es, la seguridad jurídica de la tenencia.

Aspecto central éste último, que no solo comporta, para toda persona, el derecho a gozar *"de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas"* sino el derecho de poder contar con un espacio físico adecuado para proyectar su centro de vida.-

En definitiva se trata del reconocimiento de un derecho social ¹, cuya "operatividad" impone como contrapartida la obligación del Estado del establecimiento de políticas públicas destinadas a garantizar tal derecho y el plexo de los derechos económicos, sociales y culturales que involucra.

¹ El derecho a una vivienda digna se encuentra reconocido y garantizado por la Constitución Nacional, tanto en su art. 14 bis, como en varios de los tratados incorporados a la Carta Magna en el art. 75, inc. 22 (art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). En particular, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) que reconoce "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia" (art. 11, inc. 1).

En tal sentido, la CSJN,² ha señalado que “el Estado tiene un amplio margen de discrecionalidad con respecto a qué medidas o políticas son más oportunas, convenientes o eficientes para implementar el derecho de acceso a una vivienda digna.”³

Pero sin embargo, la implementación de tales políticas “debe respetar tanto la finalidad como los límites impuestos por las normas de jerarquía superior, en este caso, la Constitución Nacional y el PIDESC. Por ello:

a) **Las medidas adoptadas deben ser proporcionadas, esto es, adecuadas para alcanzar, a partir de la realidad que pretenden regular, la finalidad impuesta por la Ley Fundamental (art. 28 de la Constitución Nacional y Fallos: 243:449 y 467; 248:800; 313:1638; 330:855; 334:516, entre otros). Ello implica que el Estado debe tener en cuenta las distintas capacidades personales, sociales y económicas de los habitantes y, sobre esa base, implementar políticas apropiadas y conducentes para lograr que todos tengan la oportunidad de acceder a una vivienda digna.**

b) **El diseño de las políticas públicas debe tener en cuenta las normas y principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que éstos son valorados por el ordenamiento jurídico en su conjunto. En particular, tiene que respetar las prioridades que la Constitución asigna a la satisfacción de los derechos fundamentales y a los grupos más vulnerables de la población**

c) **El Estado debe realizar el mayor esfuerzo posible, en razón de lo previsto por el PIDESC, para lograr, en forma progresiva y dentro de sus reales capacidades y limitaciones económicas, la plena efectividad del derecho a la vivienda digna de todos sus habitantes.**⁴

Por ello se ha señalado que el diseño e implementación de políticas públicas que posibiliten el acceso a la vivienda digna a la mayor cantidad de habitantes, “no es una cuestión que podrá ser plebiscitada en el campo de la arena política como una opción o alternativa binaria que permita elegir entre desarrollar políticas públicas con el objetivo de satisfacer las demandas sociales o no hacerlo. Se podrá debatir políticamente de que manera se llevarán a cabo esta clase de acciones públicas, pero queda fuera como opción constitucional y convencional posible, que la alternativa que se plantee sea: políticas de acceso a la vivienda o ninguna clase de políticas de acceso a la vivienda. Los representantes del pueblo podrán elegir entre distintas alternativas,

² CSJN, “Q. C., S. Y. c. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/amparo”, Sent. 24/04/2012, publicado en: LA LEY 11/05/2012, 11/05/2012, 7 - Sup. Const. 2012 (mayo), 60

³ Considerando 11 del voto del Dr. Petracchi.-

⁴ Del Voto del Dr. Petracchi

pero no están habilitados, a omitir toda clase de política pública. Posibilitar el acceso a la vivienda mediante el desarrollo de políticas públicas orientadas específicamente a dicho fin, no es una mera pauta orientadora sin ninguna clase de fuerza normativa, sino por el contrario, configura una obligación constitucional y convencional ineludible para los poderes constituidos.” (Gil Domínguez, Andrés, “Estado constitucional de derecho, políticas públicas y derecho de acceso a una vivienda digna”, publicado en: LA LEY 28/05/2012, 28/05/2012, 8 - LA LEY2012-C, 385).

En definitiva, por la presente, lo que los vecinos buscamos y petitionamos, no es más ni menos que, la implementación de una política pública de acceso a la vivienda digna, que proporcionada a nuestras condiciones personales y respetando las prioridades que las Constitución asigna, reconozca el derecho de los vecinos que habitamos los módulos de asentamiento habitacional, de contar con la seguridad jurídica de tenencia de la tierra que actualmente ocupamos, brindando certeza y efectividad a nuestro derecho de acceder a una vivienda adecuada, donde poder proyectar nuestro centro vida, en conjunto con nuestro grupo familiar.-

PROYECTO DE ORDENANZA

ARTICULO 1°: Establézcase para todos los beneficiarios de un módulo habitacional creado y otorgado en uso en el marco de la Ordenanza Municipal N° 3376 la posibilidad de optar entre aceptar el módulo que efectivamente habitan como solución definitiva, o aceptar la solución que le correspondiere según puntaje del Registro Único de Demanda Habitacional.-

ARTÍCULO 2: En aquellos casos en que los beneficiarios se decidan por la primera opción mencionada en el artículo 1° de la presente, el Departamento Ejecutivo Municipal adjudicará conjuntamente el predio fiscal y el módulo habitacional, debiéndose determinar el valor de ambos bienes, descontándose del mismo, el monto total que éstos hayan abonado en concepto de canon de uso, establecido por el artículo 5° de la Ordenanza Municipal n° 3376.-

ART. 3: Para determinar el valor del módulo habitacional, se tomará el mismo en su forma básica, tal como se entregara al beneficiario, excluyendo las mejoras que éstos hayan introducido al mismo y/o al predio a adjudicar.-